

LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA EN ARGENTINA: POLÍTICAS EDUCATIVAS Y CAMBIO CULTURAL DURANTE EL GOBIERNO DE MACRI (2015-2019)

Myriam Feldfeber [*]

[*] Profesora Titular Universidad de Buenos Aires
Magister en Ciencias Sociales con orientación en
Educación. FLACSO.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5948-6688>

E-mail: mfeldfeb@filo.uba.ar

RESUMEN

Una restauración conservadora desplazó prácticamente a todos los gobiernos democrático populares que habían sido electos en la región a partir del cambio de siglo, cuando se había iniciado una nueva etapa caracterizada por el cuestionamiento a las políticas de ajuste estructural sustentadas por los principios del Consenso de Washington, que se habían implementado en la década anterior. Este “Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina” entró en crisis en la segunda década del siglo XXI. En este artículo se analizan las principales orientaciones de política educativa y los discursos en los que se sustentaron durante la gestión de la Alianza Cambiemos en Argentina durante el período 2015-2019. Sostenemos que en el marco de la restauración conservadora se implementaron políticas redistributivas en favor de los sectores más concentrados del capital, vulnerando derechos adquiridos, y se impulsó un cambio cultural orientado a la individualización de los procesos sociales y a la naturalización de las desigualdades que la redistribución en favor de los más ricos profundizaron.

Palabras clave: Políticas educativas.
Restauraciones conservadoras. Argentina.
Derecho a la educación.

PRESENTACIÓN

Vivimos tiempos convulsionados. América Latina se debate entre las restauraciones conservadoras y los gobiernos que se proponen ampliar derechos. La pandemia agudizó las desigualdades persistentes al tiempo que está generando nuevas desigualdades. La región tuvo tiempo para prepararse y enfrentar la pandemia, sin embargo, tal como se señala en la investigación "Respuestas al COVID-19 en cinco países de Latinoamérica", sus condiciones estructurales en economía, vivienda y salubridad terminaron haciendo que el continente se transformara en un lugar propicio para la propagación del COVID-19.

En el campo educativo, el proceso de privatización y mercantilización que se viene desplegando hace décadas, adquirió un nuevo impulso, sobre todo a partir de la emergencia sanitaria que ha afectado a los sistemas educativos de todo el mundo. En este contexto, el aprendizaje en línea y la enseñanza a distancia han posicionado a las tecnologías educativas como componentes centrales de la educación a escala mundial, situando así al sector privado en el centro del derecho social a la educación (Williamson y Hogan, 2020).

La COVID-19 puso en evidencia la eficacia de los aparatos ideológicos del neoliberalismo para que la desigualdad sea considerada como el estado natural de la sociedad, mientras la ultraderecha sigue desarrollando su narrativa paranoica de permanente imputación al Otro en un peligroso desplazamiento cultural que trata de imponer la eliminación de los más débiles (Alemán, 2020).

Con diferencias de matices, estos modos de construcción política identifican a la restauración conservadora que, en el caso de América Latina, desplazó prácticamente a todos los gobiernos democrático populares que habían sido electos en la región a partir del cambio de siglo, cuando se había iniciado una nueva etapa caracterizada por el cuestionamiento a las políticas de ajuste estructural sustentadas por los principios del Consenso de Washington, que se habían implementado en la década anterior. Este "Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina" (CINAL) (Thwaites Rey y Ouviaña, 2018), también identificado como "Posneoliberalismo" (Borón, 2003, Sader, 2008; Dávalos, 2014), entró en crisis en la segunda década del siglo XXI.

En este artículo se analizan las principales orientaciones de política educativa y los discursos en los que se sustentaron durante la gestión de la Alianza Cambiemos en Argentina

durante el período 2015-2019. Sostenemos que en el marco de la restauración conservadora se implementaron políticas redistributivas en favor de los sectores más concentrados del capital, vulnerando derechos adquiridos, y se impulsó un cambio cultural orientado a la individualización de los procesos sociales y a la legitimación de las desigualdades.

En primer lugar, describimos las características que asumió esta restauración conservadora en la Argentina en el contexto latinoamericano a partir de la crisis del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo y la propagación de un discurso del odio como instrumento central de construcción política.

Presentamos, en segundo lugar, algunos de los rasgos constitutivos del cambio cultural que se buscó impulsar a través de la operacionalización de un sistema de valores que tuvo su expresión en el campo educativo.

En tercer lugar, analizamos las principales orientaciones de las políticas educativas del gobierno de la Alianza Cambiemos y los discursos en los que se sustentaron, en confrontación con las políticas implementadas por los gobiernos kirchneristas durante el período 2003-2015.

Por último, presentamos algunas reflexiones sobre las consecuencias de estas políticas sobre el derecho social a la educación

LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA EN ARGENTINA EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA

América Latina sigue siendo una región en disputa entre movimientos sociales y gobiernos que buscan generar las condiciones para materializar y ampliar derechos y fuerzas conservadoras y gobiernos neoliberales que desarrollan políticas que profundizan la desigualdad y la exclusión.

Desde mediados de la década de los noventa, frente a los efectos sociales devastadores de las reformas estructurales neoliberales implementadas en la región, comenzaron a desplegarse movimientos de resistencia que cuestionaron los proyectos de ajuste y las privatizaciones, impugnando al neoliberalismo como proyecto hegemónico. Con el cambio de siglo se inicia el CINAL y comienza a redefinirse el mapa de político latinoamericano a partir de la asunción de gobiernos que, con matices y diferentes niveles de radicalidad, internalizaron las demandas populares que, en la mayoría de los casos, posibilitaron sus triunfos electorales.

Estos gobiernos implementaron transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales “progresistas” en comparación con aquellas que había impulsado el neoliberalismo en las décadas anteriores (Ouviña y Thwaites Rey, 2018).

Los gobiernos democrático populares comenzaron a implementar políticas públicas que trajeron importantes cambios para mejorar la calidad de vida de amplios sectores sociales. En 2014, el 54% de la población latinoamericana vivía en países regidos por gobiernos progresistas, lo que constituye un hecho inédito en la historia del continente. Algunos de estos gobiernos promovieron cambios constitucionales, mientras que otros implementaron políticas sociales que plasmaron conquistas sociales significativas, como la reducción de la pobreza y la desigualdad social aun cuando permanecieron dentro de los marcos institucionales de los gobiernos neoliberales que los precedieron (Betto (2014).

A pesar de estos avances, América Latina sigue teniendo una distribución de la riqueza que la ubica entre las regiones más desiguales e injustas del mundo. De acuerdo con el Informe sobre desarrollo humano 2019 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América Latina es la región que registra mayor desigualdad de ingresos. El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región (37%) y el 40% más pobre recibe la menor parte (13%).

Los cuestionamientos a las hipótesis y prácticas de los gobiernos progresistas se intensificaron a partir del año 2013 ya que, con los efectos de la crisis económica mundial de 2008, los gobiernos ya no dispusieron de los recursos para garantizar tanto la acumulación como la redistribución de la riqueza. En el contexto de la crisis, fueron las derechas latinoamericanas las que aprovecharon la coyuntura para recuperar la iniciativa política que habían perdido a mediados de los años 2000 (Gaudichaud, F. et. al., 2019)

Durante la segunda década del siglo XX el anti-progresismo (Stefanoni, 2018), se expande por América Latina y pone en riesgo los avances democráticos de los últimos años. La nueva derecha, que llega al gobierno a través de golpes de estado o de elecciones, articula un voto que se opone a los aciertos de los gobiernos progresistas. Crece el racismo, sustentado en una visión racializada de la pobreza, y el conservadurismo contra los avances del feminismo y las minorías sexuales. El crecimiento del evangelismo político y la popularidad de políticos y referentes de opinión que declararon la guerra a lo que llaman “Ideología de Género” son algunas de las expresiones de este anti-progresismo (Stefanoni, 2018). También se inscriben en

esta línea los embates contra la naturaleza política de la educación y las críticas de lo que caracterización como “adoctrinamiento en las escuelas” a través de movimientos como “Escola Sem Partido” en Brasil (Frigotto, 2017) y los ataques al sector docente y a sus sindicatos que se oponen a los retrocesos respecto de los derechos conquistados y demandan el cumplimiento del derecho social a la educación.

Un ejemplo elocuente es el movimiento como “Con Mis Hijos No Te Metas” que surgió en Perú en el año 2016 y que se fue expandiendo en diversos países, entre otros en Argentina. Se autodefine como un movimiento ciudadano que nace como reacción a la imposición de lo que denominan como “Ideología de Género” mediante el sector educativo. En la práctica confrontan con la formación en “Educación Sexual Integral” a la que identifican con la Ideología de Género que constituyó una de las políticas de ampliación de derechos que impulsaron los gobiernos kirchneristas y que está contemplada dentro de los Pactos y Tratados Internacionales incorporados en nuestra Constitución. El 4 de octubre de 2006 se sancionó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) que tiene como objetivo garantizar la ESI de todos los niños, niñas y adolescentes. En el año 2009 el Ministerio de Educación creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar diferentes acciones sobre la temática en todo el país.

A través de esta restauración conservadora se busca frenar el avance de los gobiernos progresistas y de los movimientos populares y reprimir las protestas sociales que el modelo neoliberal y conservador genera y promover la difusión de un sentido común que legitime este modelo y las desigualdades que genera.

De acuerdo con Crisafulli (2019) el neoliberalismo, en sus diversas estrategias, siempre ha implicado un proceso de colonización de la subjetividad de las mayorías. La tercera ola neoliberal, en el marco de la restauración conservadora, ya no promete un orden político conservador como el neoliberalismo de los 70’ ni un orden económico conservador como el neoliberalismo de los 90’. Esta ola promete un orden social conservador en el que la promoción del odio constituye una forma de construcción política de los gobiernos neoliberales.

En el marco de la diversidad de procesos políticos que se desarrollaron a partir del cambio de siglo en la región, cabe preguntarse por los alcances y los límites de las políticas en materia de ampliación de derechos desplegadas por los gobiernos democrático-populares o progresistas, así como sobre las razones por las que las restauraciones conservadoras pudieron

desmontar muchas de las políticas implementadas destinadas a garantizar derechos, eliminando conquistas sociales de la primera década del siglo XXI. En el caso de Argentina, estos interrogantes surgen luego de 12 años de gobiernos kirchneristas (2003-2007; 2007-2011; 2011-2015) que impulsaron las denominadas “políticas de inclusión” con justicia Social (Feldfeber y Gluz, 2019).

En diciembre de 2015 se inició un nuevo ciclo de transformaciones económicas, políticas y sociales en la Argentina a partir de la asunción como Presidente de Mauricio Macri, heredero de uno de los principales grupos económicos del país que creció vertiginosamente sobre la base de contratos de obra pública y de actividades reguladas y fuertemente subsidiadas por el Estado. A principios de los años 2000, poco tiempo después de la grave crisis económica, social e institucional que vivió la Argentina, Macri formó un partido de derecha -Propuesta para una República de Oportunidades (PRO)- que buscaba expresar el proyecto del establishment empresarial local. Después de haber gobernado durante 8 años la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentó como candidato por la Alianza Cambiemos, encabezada por el PRO. El triunfo electoral permitió que, por primera vez, un partido de derecha accediera al gobierno a través de elecciones democráticas. Vommaro (2015) caracterizaba al PRO como “el neoliberalismo después del neoliberalismo” porque, sin formular propuestas de privatización como en la década de 1990, sus principales referentes consideran que uno de los principales roles del Estado es crear oportunidades de negocios y ponerse al servicio de las energías privadas.

Con la asunción de Mauricio Macri como Presidente, el desembarco de Chief Executive Officers (CEOs), los directores ejecutivos de máxima responsabilidad y gerentes de multinacionales y grupos económicos locales constituyó la novedosa experiencia del gobierno de Cambiemos (Gene, 2018). Con estos nuevos funcionarios se buscaba el traspaso de los criterios de la gestión privada, considerados como exitosos, a la administración pública para superar lo que caracterizaban como el espacio de corrupción y clientelismo político del populismo. “Macri solía presentarlos como “los mejores cuadros del mundo corporativo”, ajenos a “la contaminación de la política partidaria”, que venían a integrar con él “el mejor equipo de los últimos 50 años”. Para otros, sin embargo, ya por entonces comenzaba a perfilarse el que sería el principal rasgo del perfil del funcionariado nacional: el de constituir una “CEOcracia” o “gobierno de los CEOs”, una novedosa casta de altos ejecutivos provenientes,

con una frecuencia inusual, de grandes empresas privadas. Asimismo, se observaba que esta multiplicación de directivos empresariales privados al frente del Estado encerraba un riesgo, potencial pero no menor: el de que se plantearan “conflictos de intereses” (Canelo et al., 2018: 118). De este modo, a la hora de tomar decisiones se produce la captura del Estado por parte de los intereses privados o particulares de las empresas en las que los CEOs se venían desempeñando, vulnerando o perjudicando los intereses generales, los del conjunto de la sociedad. Esta creciente presencia de los intereses del sector privado en el ámbito también tuvo su expresión en el terreno educativo dando lugar a nuevas formas de privatización educativa (Feldfeber et al. 2018).

Al igual que en otros países de la región, el gobierno de Macri impulsó una restauración conservadora que produjo una significativa transferencia de recursos desde los sectores de menores ingresos a los sectores más concentrados de la economía (particularmente el sector agroexportador, las empresas energéticas y el capital financiero), en un contexto de aumento del desempleo y crecimiento de la pobreza. Uno de los ejes del plan del gobierno fue el retiro del Estado de aquellas funciones que había desarrollado en la década anterior, en especial, en lo referido a la redistribución progresiva del ingreso, la prestación de servicios a la población y la generación de condiciones para garantizar los derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación.

CAMBIO CULTURAL Y LEGITIMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES. EL ROL DE LA EDUCACIÓN

La nueva derecha, al igual que en otros países de la región, llegó con un proyecto de refundación de la sociedad. El “cambio cultural” que impulsó la alianza Cambiemos estuvo destinado a la “conquista del sentido común” (Feldman, 2019). Este cambio se sustentó en un relato que logró permear el sentido común en base a valores como el mérito, la aspiración, el sacrificio y el éxito, pero estos valores fueron reducidos a su faceta individual y les quitó todo lo que tenían de colectivo (Canelo, 2019). La educación debía cumplir un papel destacado en ese proyecto refundacional.

El nuevo relato de la derecha giró en torno al compromiso con la “igualdad de oportunidades”. Esto no implica vivir en una comunidad de iguales sin grandes abismos entre

ricos y pobres, sino que cada cual pueda desarrollarse durante su vida y llegar adonde sus propios esfuerzos o talentos se lo permitan (Adamovsky, 2017a). La igualdad de oportunidades no significa en modo alguno igualdad de posiciones, sino que son formas contrapuestas de concebir la justicia social (Dubet, 2011). En este sentido, el cambio cultural se promovió a través de una estrategia novedosa ya que no se atacó al igualitarismo para celebrar el libre mercado y el individualismo como se había hecho en la década de los '90. Por el contrario, propone su propia visión de lo colectivo, una que finge retomar y aceptar nuestros valores igualitaristas y solidarios, pero sólo para reintroducirlos en un marco diferente, que los vacía de contenido. El compromiso con la igualdad de oportunidades evoca la idea de igualdad sin comprometerse con ella de ninguna manera sustancial (Adamovsky, 2017a; Canelo, 2019).

La aparición del PRO en el escenario político local señala tanto la hostilidad de la derecha hacia los valores igualitarios como la conciencia de que, para revertirlos, hará falta una estrategia cultural. “Cambio cultural” es, precisamente, la expresión clave para entender el proyecto del macrismo. Su significado es múltiple, pero implica sobretodo combatir el deseo de igualdad (Adamovsky, 2017a).

Este cambio cultural buscó reorientar las políticas implementadas por los gobiernos kirchneristas, incluidas las políticas educativas basadas en un modelo de inclusión con justicia social. En el discurso de asunción en año 2003, el Presidente Kirchner había afirmado que “es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores” (Presidencia de la Nación, 2003).

Mientras que las denominadas políticas de inclusión desde un horizonte de igualdad orientaron las acciones de los gobiernos kirchneristas, la preocupación por la calidad desde la perspectiva de la evaluación, la innovación y el mérito, constituyó el eje del discurso macrista.

El 1° de marzo de 2016, en su primer mensaje al Congreso de la Nación, el entonces Presidente Mauricio Macri afirmó que “la educación pública tiene severos problemas de calidad y hoy no garantiza la igualdad de oportunidades. Si bien hay una importante inversión pública,

esto no se tradujo en una escuela basada en la innovación, la exigencia y el mérito. Por todo el país encontramos escuelas con severos problemas de infraestructura, maestros que no tienen suficiente capacitación, alumnos que aprueban sin aprender y padres que no se comprometen. Se han abierto nuevas universidades y eso es muy positivo, pero también muchas de ellas han sido espacios de militancia política más que de excelencia académica” (Casa Rosada. 2016).

Junto a una planificada estrategia comunicacional, el campo educativo constituyó un espacio privilegiado por el gobierno para impulsar el cambio cultural. La promoción de la meritocracia, el emprendedurismo y el liderazgo constituyeron ejes centrales de este cambio.

Para apuntalar el “espíritu emprendedor” la gestión del presidente Macri modificó la nominación de la secretaría de pequeñas y medianas empresas por “Secretaría de emprendedores y pymes”, en el año 2017 promulgó la Ley de Emprendedores para que cualquiera pueda crear una empresa en menos de 24 horas y desató una ofensiva simbólica para disputarle espacio a la idea de lo colectivo, de lo común, exacerbando la individualización de los procesos sociales (Rameri, 2018). Es por ello que los mensajes oficiales tenían como interlocutor privilegiado al “vecino” y al emprendedor (Feldman, 2019). El gobierno buscó instalar la idea de un emprendedor es cualquiera, desde una señora que vende limones o ropa en la calle hasta el dueño de una empresa que cotiza en la bolsa, emprendedores somos todos. Esta idea del emprendedor como una figura romantizada que arma equipos, genera innovación, y de ese modo beneficia no solamente su propio bolsillo sino también al resto de la sociedad (Adamovsky, 2017).

El Ministro de Educación y Deportes de la Nación, Bullrich, expresó en julio del 2016, en ocasión de la firma de convenios con el Banco Itaú, Samsung Electronics, y Peugeot Citroën: "nosotros decimos con el Presidente que debemos lograr que los chicos salgan de la escuela a crear trabajo y no a buscarlo".

También sostuvo que la “revolución educativa” era el único camino para salir de la pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y el trabajo. La misma no consistía en un simple cambio de políticas sino un cambio cultural y un compromiso con un nuevo modelo social: “no podemos preparar a los chicos hoy para los empleos que vendrán, pero podemos formarlos para dos cosas: para que aprendan a disfrutar de esta incertidumbre y para que sean los que salgan a crear esos empleos” (Bullrich, 2016b).

Se buscar formar individuos como “empresarios de sí mismo” que controlen y regulen sus emociones, aprendan a “vivir en la incertidumbre y disfrutar de ella” y se adapten a las situaciones que les toquen vivir (Feldfeber et al., 2020).

LAS PRINCIPALES ORIENTACIONES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

El presidente Macri expresó en su primer mensaje al Congreso, anteriormente citado, que "para insertar a la Argentina en el Siglo XXI todo empieza con la educación, ahí es donde se gesta el futuro del futuro. Por eso, hace unas semanas, en la Provincia de Jujuy, el ministro de Educación Bullrich, junto a todos los ministros de Educación de las provincias, fijaron un acuerdo llamado Declaración de Purmamarca que traza los ejes de la revolución educativa que queremos afianzar” (Casa Rosada, 2016).

Una versión actualizada de la Teoría del Capital Humano encarnada en la formación de emprendedores sustentó el modelo educativo impulsado por el macrismo. En este sentido, el Ministro de Educación y Deportes de la Nación Esteban Bullrich, afirmó ante los empresarios reunidos en la en la 22° Conferencia Industrial Argentina en noviembre de 2016: “No les hablo como Ministro de Educación sino como gerente de recursos humanos (...) si tenemos la mejor educación tendremos las mejores empresas del mundo. Para eso debemos preparar recursos humanos de excelencia. Debemos recorrer juntos el camino”.

Para recorrer ese camino el gobierno propuso una “revolución educativa” (Bullrich, 2016) que partió de una crítica a las denominadas políticas de inclusión de los gobiernos “kirchneristas”. Finocchiaro, quien fuera Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretario de Educación porteño y Ministro de Educación de la Nación, sostenía en el año 2015 que "adecuar el sistema educativo al siglo XXI, implica desarrollar un nivel de conciencia social respecto de la importancia de la educación como la gran transformadora de la realidad social argentina. Vamos detrás de largos debates de inclusión educativa que nos han alejado sustancialmente de los verdaderos objetivos de la educación que tienen que ver con formar a nuestros alumnos con saberes concretos que los habilite a ser parte activa de una sociedad del conocimiento”.

El diagnóstico del cual partió el gobierno fue el “fraude educativo” porque durante la década anterior se incluyeron a las y los estudiantes en el sistema, pero presentan dificultades, pero no logran finalizar los estudios y no han mejorado la “calidad educativa”.

Los debates en torno a la calidad se presentaron indisolublemente ligados a la evaluación, o para ser más precisos, a la medición estandarizada de resultados y al modelo de las competencias que los sistemas educativos deberían promover: la centralidad otorgada a las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment, en español Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) promovidas por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), constituyen el ejemplo más acabado de esta asociación.

Este enfoque reduccionista sobre la calidad, que se había instalado de la mano de los tecnócratas en el marco de la autodenominada transformación educativa de los años '90 y que durante la gestión de la alianza Cambiemos se difundió a través de los CEOs de las empresas, se sustentó en la cultura de la Nueva Gestión Pública y del marketing empresarial y "personal" como modos de gestionar los asuntos públicos. En este marco estuvo ausente el enfoque de derechos que fue central en la retórica de los gobiernos kirchneristas. El derecho a la educación fue desplazado del discurso oficial por la idea de igualdad de oportunidades en torno a los aprendizajes. Este desplazamiento se instaló en un escenario de fuerte desconfianza hacia los docentes por el rendimiento de los estudiantes, medido a través de esas pruebas estandarizadas. En este sentido, la evaluación de los docentes también constituyó una de las medidas de política impulsadas por el gobierno de Macri (Feldfeber, 2016).

La centralidad otorgada a la evaluación en la gestión macrista tuvo su expresión tanto en los discursos oficiales como en las medidas del gobierno: creación de la Secretaría de Evaluación; aumento exponencial del presupuesto destinado a las acciones de evaluación; Creación de los Operativos Aprender y Enseñar y elaboración del Proyecto de Ley Plan Maestr@.

La Secretaría Evaluación Educativa fue creada en diciembre de 2015 junto con la modificación de toda la estructura del Ministerio, transformado en Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. En el decreto se establece que "ante la necesidad de contar con información y monitoreo para la mejora continua del sistema educativo, es política del Gobierno Nacional jerarquizar a la evaluación, promoviendo la implementación de un Sistema Integral de Evaluación que fortalezca al sistema educativo y al conjunto de sus actores". Hasta ese

momento la producción de información sobre el sistema estaba a cargo del sistema federal de información educativa; coordinado por la Dirección Nacional de Información y Estadística de la Calidad Educativa (DINIECE) que producía información cuantitativa y cualitativa. Al respecto cabe destacar que, a diferencia de lo señalado por la gestión macrista, el problema central no es la falta de información, sino el uso de esa información y la ausencia de políticas que puedan superar los problemas identificados a través la información que se produce en el marco de un país federal.

En cuanto a la inversión educativa, se produjo una reducción de la inversión que había aumentado en la década anterior de acuerdo con la Ley de Financiamiento Educativo sancionada en 2005. En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2020, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en el año 2019, quedó claramente plasmada la tendencia al descenso que sufrió la función educación del total del presupuesto del Estado nacional durante el gobierno de la alianza Cambiemos que fue un 34% más bajo en términos reales respecto del año 2016. En el mismo sentido, la caída de la participación de la inversión en Educación y Cultura en el PBI llega al 35% desde 2015, mientras que el pago de intereses de la deuda externa se duplicó en ese período (CTERA, 2019).

El Operativo Nacional de Evaluación (ONE), que se venía implementando desde el año 1993, fue reemplazado por el operativo "Aprender", que volvió a ser censal. Con la aplicación de la prueba "Aprender" se propuso dar visibilidad a los operativos de evaluación y concientizar a la sociedad sobre la importancia de la prueba nacional como una instancia fundamental del aprendizaje. El Operativo "Enseñar" es la evaluación diagnóstica elaborada por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación destinada a estudiantes del último año de los Institutos Superiores de Formación Docente.

En la presentación de los resultados del Aprender 2018 el presidente Macri afirmó que "esta evaluación no es una evaluación más. Esto tiene que ver con un mandato profundo, un mandato que nos dio el pueblo argentino a nosotros como gobierno, que es el de gobernar con la verdad sobre la mesa, porque antes lo que se hacía era no evaluar, tratar de esconder debajo de la alfombra qué estábamos enseñado, cómo lo estábamos enseñando, si funcionaba o no funcionaba. Y, no escondíamos unos resultados, lamentablemente estábamos escondiendo que nuestros chicos no estaban aprendiendo".

El Plan Maestr@, elaborado sin la participación de las maestras y los maestros y de las comunidades educativas, tenía como objetivo transformarse en el instrumento legal que orientase la política de gobierno. El documento que iba a transformarse en un proyecto de ley, generó muchos cuestionamientos y finalmente no fue presentado. En el Plan se proponía la creación de un Instituto de Evaluación y diseñar e implementar un sistema de evaluación para los estudiantes y egresados de los Institutos de Formación Docente.

En cuanto a las y los docentes, la Paritaria Nacional Docente, que se venía convocando en los gobiernos kirchneristas, se desarrolló en el año 2016. En 2017 no se realizó la convocatoria y por decreto se fijó el piso salarial en un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil. Esto generó una situación de confrontación con los sindicatos docentes, en especial con el sindicato con mayor representación nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina (CTERA), que se mantuvo hasta el fin de la gestión.

En el marco de la restauración neoliberal y conservadora impulsada a partir de la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional en el año 2015 se profundizaron las tendencias privatizadoras “de” y “en” la educación -en los términos planteados por Ball y Yodell (2007)- que se venían desplegando hacer tiempo en el campo educativo al tiempo que se desarrollaron nuevas formas de privatización. Entre las tendencias históricas podemos señalar el crecimiento de la matrícula del sector privado en los niveles inicial, primario y medio, los subsidios estatales al sector privado (definido en la Ley como público no estatal) tendencia histórica) y la implementación de evaluaciones estandarizadas. Entre las nuevas tendencias podemos señalar la reducción de la inversión educativa, el desfinanciamiento y sub-ejecución de programas educativos que se venían implementando en los gobiernos kirchneristas y en especial la creciente presencia del sector privado en el campo de las políticas públicas.

Junto con la reducción de la inversión educativa, se pueden identificar transformaciones en las orientaciones de política en lo que respecta a la asignación de las prestaciones (Feldfeber y Gluz, 2019).

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR.) constituye un ejemplo elocuente de estos cambios porque se establecieron modificaciones en los requisitos para pedir el beneficio y mantenerlo y en la cantidad de dinero que se otorgaba, mientras que en el gobierno anterior eran una contribución única para la incorporación educativa de jóvenes entre 18 y 24 años cuyos salarios familiares estuvieran por debajo de los tres salarios mínimos.

De este modo incorporan aquí también una perspectiva meritocrática en la asignación de las prestaciones al establecerse recursos adicionales para las mejores calificaciones (Gluz y Ochoa, 2018).

Mientras que en el período del 2003 al 2015, el sector docente, las universidades nacionales como consultoras del Estado y los movimientos sociales constituyeron los interlocutores privilegiados del gobierno nacional; la gestión de gobierno durante los años 2015 y 2019 se caracterizó por la presencia de Fundaciones, ONG's, universidades privadas y en algunos casos grupos empresariales, nacionales empresarios, en el campo de las políticas públicas en educación. Estos actores, articulados en redes políticas (Ball, 2011) pasaron a ocupar un lugar central en la definición de la agenda educativa, en la gestión de programas, en la producción, control y difusión de la información y en la formación docente. En algunos casos se desarrollaron acciones a través de la firma de convenios con el Ministerio Nacional y con algunos ministerios provinciales (Feldfeber et al., 2018). A través de estos convenios se intentaron legitimar procesos de privatización y mercantilización de la educación mediante una poderosa y extensa formación discursiva basada en la idea del cambio como motor de los procesos de reforma impulsados desde el Estado.

La firma de convenios con la Fundación Varkey constituye un caso paradigmático. La fundación se define como una organización sin fines de lucro, creada, de acuerdo con la información de su página web, "para mejorar los estándares educativos de los niños menos favorecidos de todo el mundo. Nuestra misión es que todos los niños tengan acceso a un gran docente". Implementa el "Premio al Docente Global", que otorga 1 millón de dólares a un "docente excepcional, que haya hecho una contribución sobresaliente a su profesión". Comenzó a trabajar en Argentina en octubre de 2016 para implementar en conjunto con el Ministerio de Educación "El Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE) que es una capacitación intensiva de seis semanas diseñada para miembros del equipo de conducción de las escuelas junto con un acompañante. El programa comenzó a dictarse en el año 2017 en las provincias de Jujuy, Mendoza, Salta y Corrientes. Se firmaron convenios entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y la Fundación por un monto de USD 5,4 millones en cada caso.

Este caso constituye un ejemplo elocuente de las formas que asume la privatización de y en la educación en Argentina. Por un lado, la contratación millonaria en dólares de una fundación creada por Sunny Varkey, presidente de GEMS Education, la empresa de "servicios

educativos” más grande del mundo que gestiona escuelas en 176 países, llegando a unos 120.000 estudiantes, que tiene un valor de mercado de alrededor de 2.1 billones de dólares (de acuerdo a la cotización informada por Forbes en el año 2020). Por otro, la introducción de los valores de la NGP en el espacio educativo basados en el paradigma de la enseñanza como liderazgo a través de la implementación del Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE) (*Leadership & Innovation*). En este sentido, la firma del convenio resulta en un mercado lucrativo a la vez que se difunden valores asociados a los principios de la nueva gestión pública, se fortalece un modelo de extranjerización de la educación (al contratar una fundación para brindar cursos que podrían ser impartidos por universidades o fundaciones locales) y se refuerzan las tendencias mercantilizadoras y privatizadoras de la educación que legitiman una sociedad de mercado atravesada por profundas desigualdades en la medida en que las condiciones de producción de los procesos de enseñanza y aprendizaje no constituyen el eje central de la propuesta formativa.

El ex Ministro de Educación propuso la formación de un docente global cuyo título tengo validez internacional (con participación y aval de organismos internacionales) en el marco de una política que, desde su perspectiva, debe ser global. En este sentido considera que es necesaria la búsqueda de un estándar global en lo que respecta a la formación y desarrollo profesional docente (Bullrich, 2020).

En una investigación desarrollada en el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte de la CTERA (Feldfeber, et al., 2020) analizamos los aspectos referidos a la formación de subjetividades y de sentido común a través de algunos de los temas que integraron la agenda privatizadora en el campo de la educación y que cobraron un fuerte impulso durante la gestión del presidente Macri (2015-2019). Entre estos temas podemos identificar el paradigma de liderazgo como modelo educativo; la promoción del emprendedurismo y del “espíritu emprendedor” vinculado con el modelo de los “unicornios” y el caching educativo; un uso “aplicacionista” de las neurociencias (Castorina, 2016) a través de la banalización en las propuestas formativas y la promoción de la educación emocional como regulación de las conductas y desarrollo de habilidades para el mercado laboral para formar individuos “felices”, “controlados” y productivos (Abramovsky, 2018).

Estos tópicos han contribuido a “configurar una agenda privatizadora porque, por un lado, se sustentan en procesos de subjetivación que colocan el foco en el individuo, en su

cerebro, en el control de sus emociones y en formas de responsabilización por los problemas y logros educativos que el Estado debe garantizar el derecho social a la educación. Por otro lado, porque, de la mano del giro conservador, promueven la difusión de los principios ligados a la Nueva Gestión Pública en el campo educativo en base a un modelo que asimila el funcionamiento de la escuela al de una empresa y que busca básicamente acoplar el sistema educativo a las demandas del mercado. Asimismo, detrás del impulso de estas temáticas existe un enorme negocio para el sector privado” (Feldfeber et al., 2020: 5 y 6).

Con relación a la promoción de la educación pública, en un informe de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE, 2017) se señalaba que algunos de los hechos y decisiones del gobierno no contribuyeron a fortalecer el carácter público de la educación y las capacidades estatales para promoverlo. Se mencionan como referencias: la desjerarquización de la docencia que significa la convocatoria de voluntarios sin formación, para desempeñar actividades educativas en los establecimientos escolares; el mensaje que se envía a las escuelas para que difundan los resultados de los operativos de evaluación, fomentando la competencia entre las instituciones y la pérdida de capacidades estatales por el desmantelamiento de la Dirección de estadística del Ministerio y su posible traspaso de funciones a entes privados externos.

REFLEXIONES FINALES: EL IMPACTO DE LAS RESTAURACIONES CONSERVADORAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Para finalizar cabe entonces preguntarnos por el impacto de las orientaciones de política sobre el derecho social a la educación en un contexto de restauración conservadora. Este interrogante no puede comprenderse al margen de la comparación respecto de las políticas de ampliación de derechos implementadas por los gobiernos progresistas en la región y de las transformaciones económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales en las que se desarrollan los procesos educativos.

En el caso de Argentina el recorrido por las orientaciones de política educativa pone en evidencia que el derecho social a la educación no constituyó la prioridad de la gestión de la alianza Cambiemos durante el período 2015-2019. El derecho a la educación fue desplazado,

al igual que el conjunto de los derechos sociales, de la agenda de gobierno, al tiempo que se redujo la inversión educativa.

El desplazamiento desde el derecho social a la educación hacia al derecho individual al aprendizaje en base al modelo de igualdad de oportunidades, fue parte del cambio cultural destinado a la construcción de un sentido común y la formación de subjetividades asociadas a las demandas del mercado. A través de este desplazamiento se buscó legitimar un orden social cada vez más injusto y desigual, lo que constituye el núcleo conservador de la propuesta del gobierno del Presidente Macri. La educación jugó un papel fundamental en este proceso.

BIBLIOGRAFÍA

ABRAMOWSKI, A. Respiración artificial: El avance de la educación emocional en la Argentina. **Revista Bordes**, Buenos Aires, n. 10, p. 9-17, 2018.

ADAMOVSKY, E. **El cambio y la impostura**: La derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión PRO. Buenos Aires: Planeta, 2017.

ADAMOVSKY, E. Del igualitarismo a la democracia. **Le Monde Diplomatique**, Buenos Aires, n. 218, agosto 2017.

ALEMÁN, J. **Pandemonium**: Notas sobre el desastre. Madrid: Ned Ediciones, 2020

BORON, A. El pos-neoliberalismo: un proyecto en construcción. *In*: SADER, E.; GENTILI, P. **La trama del neoliberalismo**: Mercado, crisis y exclusión social. Buenos Aires: CLACSO, 2003.

BALL, S.; YODELL, D. **La privatización encubierta de la educación pública**. Instituto de Educación, Londres: Universidad de Londres, 2007.

BALL, S. Política social y educativa, empresa social, hibridación y nuevas comunidades discursivas. **Revista Propuesta Educativa**, n. 36, v. 2. p. 25-34, 2011.

BENITEZ, M. A. *et al.* Responses to COVID-19 in five Latin American countries. **Health Policy and Technology**, v.9, n.4, p.525-559, 2020.

BULLRICH, E. La revolución educativa es el único camino. **Diario Clarín**, Buenos Aires, 28 oct., 2016.

BULLRICH, E. Entrevista a Esteban Bullrich. **Noticias de la Universidad Católica de Córdoba**, Córdoba, 29 jun. 2016. Disponible em: <https://www.uccor.edu.ar/noticiasucc/entrevista-al-ministro-esteban-bullrich/>. Acceso em: 24 feb. 2020.

BULLRICH, E. La educación nos hace independientes. **Diario La Nación**, Buenos Aires. 21 jul. 2016. Disponible em: <https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-educacion-nos-hace-independientes-nid1920304>. Acceso em: 24 feb. 2020.

CADE. **El derecho a la educación en Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?** Buenos Aires: Campaña argentina por el derecho a la educación, 2017.

CANELO, P *et al.* Articulación entre elites económicas y elites políticas en el gabinete nacional de Mauricio Macri (2015-2018). In: GARCIA DELGADO *et al.* (comp.). **Elites y captura del Estado**. Buenos Aires: FLACSO, p. 117-136, 2018.

CASTORINA, A. La relación problemática entre Neurociencias y educación: Condiciones y análisis crítico. **Propuesta Educativa**, Buenos Aires, n. 46. FLACSO, 2016.

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN. **Declaración de Purmamarca**, 2016.

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN. **Resolución n. 285/16**, Plan Estratégico Nacional 2016 - 2021, Argentina enseña y aprende, 2016.

CRISAFULLI, L. El odio como dispositivo político. **La Tinta**, Buenos Aires, 2019. Disponible em: <https://latinta.com.ar/2019/02/el-odio-como-dispositivo-politico/>. Acceso em: Acceso em: 30 marzo 2020.

FELDFEBER, M. Facsímil: algunas notas para analizar el discurso hegemónico sobre la calidad y la evaluación. In: BRENER, G.; GALLI, G. (comp.). **Inclusión y calidad como políticas educativas de Estado o el mérito como opción única de mercado**. Buenos Aires: La Crujía.

FELDFEBER, M; GLUZ, N. Las políticas educativas a partir del cambio de siglo: Alcances y límites en la ampliación del derecho a la educación en la Argentina. **Revista Estado y Políticas Públicas**, n. 13. p. 19-38, 2019.

FELDFEBER, M., *et al.* **La privatización educativa en Argentina**. Buenos Aires: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina – CTERA, 2018.

FELDFEBER, M. *et al.* **Privatización y mercantilización educativa en Argentina: Formación de subjetividades y construcción de sentido común durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019)**. Buenos Aires: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina – CTERA, 2020.

FELDMAN, S. **La conquista del sentido común**: Cómo planificó el macrismo el “cambio cultural”. Buenos Aires: Ediciones Continente, 2019.

FINOCCHIARO, A. Entrevista a Alejandro Finocchiaro. **Líderes Argentinos**, Buenos Aires, 2015. Disponible em: <http://www.lideresargentinos.com/finocchiaro-subsecretario-de-educacion-hay-que-alfabetizar-en-tecnologia/>. Acceso em: 13 oct. 2020.

FRIGOTTO, G. (org). **Escola “sem” partido**: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017.

GAUDICHAUD, F. *et al.* **Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI**: Ensayos de interpretación histórica. México: UNAM Ediciones, 2019.

GENÉ, M. Politización y controversias: los CEO en el gobierno de Cambiemos. **Revista Ensamblés Primavera**, Buenos Aires, año 5, n.9, p. 41-62, 2018.

GLUZ, N.; OCHOA, M. Los cambios en el Progresar: ni aumento económico ni mejora educativa. **Infobae**, Buenos Aires, 5 feb. 2018.

PEN. Poder Ejecutivo Nacional. **Proyecto de Ley Plan Maestr@**, Versión borrador. Buenos Aires, 2017. Disponible em: <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005527.pdf>. Acceso em: 20 sept. 2020.

RAMERI, A. El emprendedurismo: el nuevo ropaje neoliberal. **Revista de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas**, Buenos Aires, 16 feb. 2020.

SADER, E. **Refundar el Estado**: Posneoliberalismo en América Latina. Buenos Aires: CTA-CLACSO, 2008.

STEFANONI, P. Antiprogresismo: Un fantasma que recorre América Latina. **Nueva Sociedad**, 2018. Disponible em: <https://nuso.org/articulo/antiprogresismo/>. Acceso em: 25 Sept. 2020.

OUVIÑA, H.; THWAITES REY, M. El ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina: auge y fractura. In: OUVIÑA, H.; THWAITES REY, M. (comp.). **Estados en disputa**: auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, Buenos Aires: El Colectivo, 2018.

VOMMARO, G. Neoliberalismo después del neoliberalismo. **Diario Página 12**, Buenos Aires, 10 marzo 2015. Disponible em: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-267767-2015-03-10.html>. Acceso em 14 agosto 2020.

WILLIAMSON, B.; HOGAN, A. La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la COVID-19. **Internacional de la Educación**, Bruselas, 2020.

**CONSERVATIVE RESTORATION IN ARGENTINA: EDUCATIONAL POLICIES
AND CULTURAL CHANGE DURING THE MACRI GOVERNMENT (2015-2019)****ABSTRACT**

A conservative restoration displaced practically all the popular democratic governments that had been elected in the region since the turn of the century, when a new stage had begun characterized by the questioning of structural adjustment policies supported by the principles of the Washington Consensus, which had been implemented in the previous decade. This "Cycle of Challenge to Neoliberalism in Latin America" entered into crisis in the second decade of the XXI century. This article analyzes the main educational policy orientations and the speeches on which they were sustained during the management of the Alianza Cambiemos in Argentina in the period 2015-2019. We argue that in the framework of the conservative restoration, redistributive policies were implemented in favor of the most concentrated sectors of capital, violating acquired rights, and a cultural change was promoted aimed at the individualization of social processes and naturalization. of the inequalities that the redistribution in favor of the richest ones deepened.

Keywords: Educational policies. Conservative restorations. Argentina. Right to education.

**RESTAURAÇÃO CONSERVADORA NA ARGENTINA: POLÍTICAS
EDUCACIONAIS E MUDANÇA CULTURAL DURANTE O GOVERNO MACRI
(2015-2019)****RESUMO**

Uma restauração conservadora deslocou praticamente todos os governos democráticos populares eleitos na região desde a virada do século, quando se iniciou uma nova etapa caracterizada pelo questionamento das políticas de ajuste estrutural amparadas pelos princípios do Consenso de Washington. , que havia sido implementado na década anterior. Esse "Ciclo de Desafios ao Neoliberalismo na América Latina" entrou em crise na segunda década do século XXI. Este artigo analisa as principais orientações da política educacional e os discursos que as sustentaram durante a gestão da Alianza Cambiemos na Argentina no período 2015-2019. Argumentamos que no marco da restauração conservadora, políticas redistributivas foram implementadas em favor dos setores mais concentrados do capital, violando direitos adquiridos, e foi promovida uma mudança cultural visando à individualização dos processos sociais e naturalização das desigualdades que a redistribuição em favor dos mais ricos aprofundou.

Palavras-chave. Políticas educacionais. Restaurações conservadoras. Argentina. Direito à educação.

Submetido em: novembro de 2020.

Aprovado em: dezembro de 2020.

Publicado em: dezembro de 2020.